

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-25963-2019
CARATULADO	: FISCO DE CHILE/ROJAS

Santiago, diecinueve de Abril de dos mil veintidós

VISTOS:

Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, Santiago, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de Arturo Max Rojas Henríquez, respecto de quien no señala profesión u oficio, con domicilio en calle Sierra Esmeralda N° 3965, casa 16, Peñalolén.

Expone que entre los años 2006 y 2017 funcionarios públicos adscritos a distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, a quienes correspondía, entre otras tareas, la custodia de caudales públicos en dicha institución, formaron una organización criminal para sustraerlos o consentir que otros terceros involucrados los sustrajeran, abusando de las facultades de custodia y administración que ejercían en sus respectivos cargos y funciones, aprovechándose de sus distintas posiciones, conocimientos especiales e información relevante, que tenían en razón de sus oficios en Carabineros de Chile, lo que también les permitió eludir por años los controles internos y externos sobre tales recursos públicos. Asimismo, que en estos hechos también intervinieron civiles que, conociendo la calidad de funcionarios públicos y las funciones que ejercían, y concertados con éstos, facilitaron los medios para que se concretara la sustracción de caudales públicos por una suma total que a la fecha asciende a \$28.348.928.198.

Sostiene que funcionarios públicos y civiles fueron formalizados en causa RUC 1601014175-7 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y que con fecha 26 de julio de 2019, en causa RIT 16344-2018 y RUC 1800874868-K, se procedió a dictar sentencia condenatoria en juicio abreviado en contra de 4 de los 51 acusados, dentro de los cuales se encuentra Arturo Max Rojas Henríquez, en



«RIT»

Foja: 1

calidad de autor por el delito de malversación de caudales públicos del artículo 233 N° 3 del Código Penal, en relación al artículo 238 del referido texto legal, y como coautor del delito de lavado de activos contemplado en el artículo 27 letras a) y b) de la Ley N° 19.913.

Agrega que los imputados funcionarios públicos desempeñaban sus cargos en el edificio institucional denominado “Edificio General Norambuena”, ubicado en calle Amunátegui N° 519 de esta ciudad, que alberga, entre otras, las oficinas de la Dirección de Finanzas, conformada por los siguientes cuatro departamentos: Depto. I. Presupuestos y Finanzas; Depto. II. Normas, Procedimientos y Controles Específicos; Depto. III. Tesorería y Remuneraciones (actual Tesorería Institucional); y, Depto. IV. Contabilidad y Finanzas. En este contexto, la forma de operar diseñada e implementada por la organización, a través de distintas modalidades, se componía de las siguientes fases o etapas, según relata:

1) Identificación de vulnerabilidades o debilidades en la implementación de controles internos al interior de la institución, relacionados con la disponibilidad financiera.

2) Análisis de los recursos o caudales susceptibles de ser sustraídos.

3) Planificación y elaboración de maniobras informáticas, financieras y/o contables, a través de las cuales poder sustraer dineros desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, implementando sistemas vulnerables a manipulaciones o vulnerando los sistemas de control existentes, falsificando instrumentos públicos y privados, alterando registros contables, entre otras maniobras encaminadas a la concreción de los fines ilícitos de la organización criminal.

4) Identificación de personas que ocupen cargos o desempeñen funciones útiles para llevar a cabo las maniobras descritas, tendientes a la concreción de los fines de la organización criminal, incluyendo el reclutamiento de testaferros que faciliten la ejecución de dichos fines.

5) Ejecución del plan criminal mediante la realización de maniobras y actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile.

6) Fraccionamiento y distribución de parte del dinero sustraído: los receptores de los montos sustraídos debían fraccionar y distribuir el dinero entre miembros de la organización, mediante la emisión y entrega de cheques en



«RIT»

Foja: 1

blanco, transferencias bancarias, depósitos, vale vista o retirando el dinero de las cuentas para luego entregarlo en efectivo.

7) Realización de inversiones con las ganancias ilícitamente obtenidas, además de la constitución y/o utilización de personas jurídicas. Los miembros de la organización ocultaban o disimulaban el origen ilícito de los bienes o los bienes en sí mismos producto de la malversación de caudales públicos, para lo que utilizaban diversas formas, tales como adquirir inversiones a nombre propio o de terceras personas, realizar un proceso de estratificación de los montos, entre otros, conforme acusa.

8) Identificación y captación de personas que pasarían a sustituir en sus funciones a los miembros de la organización criminal que dejaran de formar parte de la misma o de la institución de Carabineros de Chile, asegurando de esta manera la permanencia en el tiempo y la continuidad en su funcionamiento.

Indica que dentro de este esquema de operaciones y de forma particular, el demandado suministró medios e instrumentos, luego de ser reclutado por diferentes miembros y/o líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7, y/o imputados reclutados directa o indirectamente por éstos, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de los miembros de la referida organización criminal, para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, del modo siguiente: el demandado, Arturo Max Rojas Henríquez, Teniente Coronel de Carabineros, facilitó su cuenta corriente N° 11484306 del Banco BCI en al menos una ocasión, el 16 de septiembre de 2011, para recibir una transferencia injustificada desde la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N° 9018140, denominada "Valores en Tránsito", por montos malversados de, al menos, \$43.524.756. El condenado, a sabiendas de que determinados dineros o bienes procedían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, ocultó o disimuló su origen ilícito y los bienes en sí mismos que provenían de dichos delitos. Para conseguir su objetivo, realizó diversas maniobras que le permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita.

Añade que la comisión de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos por parte del demandado de autos, y en las causas RUC 1601014175-7 y 1800874988-0, generó millonarias ganancias totales por al menos \$28.348.928.198, aproximadamente. Destaca que parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal,



Foja: 1

mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito, cometiéndose el delito de lavado de activos, bajo distintas modalidades. Los actos de lavado de dinero realizados por los imputados fueron, según describe: 1) realización de giros, ya sea de forma fraccionada o en uno solo, de los dineros ilícitamente obtenidos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, manteniendo una comisión por haber facilitado su cuenta bancaria para tal efecto; 2) entrega y/o distribución de dinero a distintos miembros de la organización o a otros coimputados reclutados por éstos, ya sea mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias, emisión de vales vista o entregas en efectivo en domicilios particulares, en la vía pública y oficinas institucionales; 3) adquisición de bienes a título personal. Parte del dinero de origen ilícito que recibían los imputados, ya sea directa o indirectamente, era posteriormente desvinculado progresivamente de su fuente ilícita, mediante su utilización para la adquisición de diversos bienes, tales como vehículos, inmuebles, caballos y otros; 4) utilización de testaferros para la adquisición de bienes. Los imputados se valieron de terceras personas, naturales o jurídicas, a través de quienes adquirieron bienes, poniéndolos o inscribiéndolos a nombre de éstas, con el objeto de desvincular progresivamente el dinero de su fuente ilícita, dándole así a estas adquisiciones apariencia de legalidad.

Plantea que durante el curso de la investigación se pudo establecer que Arturo Max Rojas Henríquez, luego de recibir en sus cuentas bancarias personales múltiples depósitos de millonarias sumas de dinero provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, efectuó una serie de actos de lavado del dinero ilícitamente obtenido, ya sea mediante transferencias electrónicas realizadas de forma fraccionada o por un solo monto a miembros de la organización criminal, mediante firma y envío de cheques en blanco o cruzados que eran posteriormente cobrados por miembros de la organización o terceros, personas naturales o jurídicas; o bien, mediante retiros íntegros o fraccionados de millonarias sumas de dinero en distintas sucursales bancarias, también a través de cajeros automáticos, además de permitir la utilización de cuentas bancarias personales. De esta forma, el condenado, con dineros provenientes de malversación de caudales públicos, a sabiendas que dicho dinero tenía un origen ilícito y con el objeto de poder aprovecharlo y utilizarlo sin temor a controles o a perderlos por la ilícita forma en que fue adquirido, realizó una serie de actos de lavado de activos, destinados a ocultar su origen ilícito, dándoles en definitiva una apariencia de legalidad. Para tal efecto, las ganancias ilícitamente obtenidas fueron objeto de una serie de actos de adquisición, posesión, tenencia,



«RIT»

Foja: 1

fraccionamiento y uso de bienes, conociendo su origen espurio y con ánimo de lucro, conforme narra en la demanda.

Reitera que el demandado, operando como testaferro del imputado acusado en causa RUC 1601014175-7, Flavio Echeverría Cortez, permitió la utilización de su cuenta bancaria para la sustracción de millonarias sumas desde cuentas institucionales por parte de líderes y miembros de la organización criminal a la que Echeverría Cortez pertenecía. Asimismo, que luego de recibir ilícitamente los referidos fondos públicos en su cuenta -y siguiendo instrucciones de Echeverría Cortez-, el demandado puso a disposición de miembros de la organización criminal una parte de tales fondos, realizando 8 transferencias electrónicas parciales desde su cuenta corriente N° 11484306 Banco BCI entre el 20 y el 26 de septiembre de 2011 a Flavio Echeverría Cortez, conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecidos por éste. Cabe considerar – según indica- que respecto del ilícito de malversación de caudales públicos para efectos de concurrir la minorante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, se efectuaron consignaciones por el demandado Arturo Max Rojas Henríquez por la suma de \$2.180.000, lo que se entendió como celosa reparación.

Concluye indicando que en dicho proceso penal se ha establecido la participación del demandado en carácter de autor del delito de malversación de caudales públicos y de coautor del delito de lavado de dinero, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de los miembros de la referida organización criminal, para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Así, el monto de la sustracción -siendo el perjuicio causado al Fisco- que se atribuye al demandado, corresponde a la suma de a lo menos \$43.524.756.

Explica que la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2019, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 16.344-2018 y RUC 1800874868-K, se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 31 de julio de 2019, condenándose al demandado individualizado, en calidad de autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, a las penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, y multa de 10 UTM, y a la pena de setecientos días de presidio menor en su grado medio, accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos durante la condena, y multa de 10 UTM, respectivamente.



«RIT»

Foja: 1

En cuanto al derecho, expresa que tratándose de un perjuicio fiscal derivado de la comisión de un ilícito penal, y habiéndose preparado la demanda civil en sede penal, para perseguir la responsabilidad civil del demandado se debe observar las reglas que para estos casos contempla tanto la legislación civil como la ley procesal penal vigente en nuestro país. Los hechos referidos en esta presentación sin lugar a dudas configuran, además del delito penal por el que se condenó, un delito civil por cuya comisión ha nacido para su autor la obligación de indemnizar los daños causados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1437 y 2314 y siguientes del Código Civil ya que entre las infracciones y el daño producido, existe la relación de causa-efecto exigida por la ley para determinar la responsabilidad del demandado. Concorre en la especie el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que permite hacer valer dicha sentencia condenatoria penal en este juicio civil. Fallo que conforme al artículo 180 del mismo cuerpo legal, produce cosa juzgada en esta sede, por lo que, *“No será lícito en éste tomar en alegación pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”*. En consecuencia, estima evidente la total relevancia en el caso que nos ocupa de los artículos 178 y 180 del citado cuerpo legal, ya que el demandado en su calidad de imputado y acusado penal fue condenado en procedimiento abreviado, por delitos de malversación de caudales públicos y de lavado de dinero, causando el perjuicio ya señalado. En dicho juicio penal se respetaron todos los derechos y garantías de los imputados, medió bilateralidad de la audiencia, siendo dable destacar que su defensa se conformó con la sentencia de primera instancia condenatoria, no recurriendo de la misma. Dicho fallo se plasmó en una sentencia condenatoria penal, hoy firme, totalmente fundada, ya que cumple absolutamente con el requisito que en tal sentido establece el artículo 36 del Código Procesal Penal. Por otra parte, en la misma sede penal hubo por parte del hoy demandado civil expreso reconocimiento de los hechos de la acusación, que dieron cuenta de la existencia de los delitos y de la participación del acusado, y de los antecedentes de la carpeta de investigación del Ministerio Público. En tal sentido, dicho reconocimiento entiende se deberá estimar como prueba completa en este juicio civil, por tratarse de la confesión extrajudicial tratada en el artículo 398 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, por haber sido prestada en juicio diverso, pero seguido entre las mismas partes.

Afirma que, en consecuencia, los delitos cometidos por el demandado civil tuvieron como resultado un perjuicio al Fisco que asciende a \$43.524.756, suma



«RIT»

Foja: 1

por la cual se demanda, dineros que el demandado está obligado a restituir, conforme lo disponen los artículos 2314 y 2329 del Código Civil.

Finalmente, respecto de la indemnización de los perjuicios, enfatiza que señala el Código Penal en su artículo 24 que *“toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables”*.

Pide se acoja la demanda y se condene al demandado a pagar al Fisco de Chile la suma de \$43.524.756, que corresponde al monto defraudado, originada por su acción fraudulenta en perjuicio de Carabineros de Chile, y que la suma anterior se pagará con el reajuste experimentado por el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en la cual se cometió el delito y la del pago efectivo, o bien, en subsidio, desde la fecha que el Tribunal determine hasta el momento del pago efectivo, con intereses corrientes sobre el capital reajustado, calculados desde que el demandado se constituya en mora y hasta el pago efectivo, con costas.

Con fecha 3 de agosto de 2020 se tiene por notificada a la parte demandada.

Con fecha 9 de septiembre de 2020 se realiza audiencia citada en autos.

La parte demandada contesta mediante minuta escrita presentada con fecha 3 de agosto.

Opone la excepción de prescripción, en conformidad con el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo sustantivo, solicitando que por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.

Señala que ya prescribió completamente la obligación reclamada por la contraria. Desde que ocurrieron los hechos que motivan esta causa han transcurrido más de 8 años, casi 9, hasta el momento del ingreso de esta contestación, y que el plazo requerido por el legislador es de 4 años. Reflexiona sobre la prescripción e indica que el hecho dañoso ocurrió el día 16 de septiembre de 2011 y el plazo de 4 años que establece el legislador para la prescripción de la acción se cumplió el día 16 de septiembre de 2015.

Añade que la sentencia penal que exhibe la contraria es consecuencia de un procedimiento penal que fue incoado estando ya cumplidos los plazos de



«RIT»

Foja: 1

prescripción para la acción civil. Así, contra su representado se inició la causa penal RIT O-4730-2017 el día 14 de abril de 2017, y después se continuó la tramitación, por los mismos hechos, en la causa de procedimiento abreviado RIT O-16344-2018, iniciada el 12 de septiembre de 2018. Es decir, que la causa penal se inició mucho después de prescrita la responsabilidad civil. Por tanto, a su entender, malamente puede alegarse interrupción civil de la prescripción. Más aún, no se persiguió la responsabilidad patrimonial contra su defendido en esos autos penales, los que se iniciaron como ordinarios, limitándose a demandar civilmente recién ahora. Tampoco se preparó la acción civil en esos autos penales. Indica que el problema de la prescripción extracontractual no se refiere tanto al conocimiento del daño o al establecimiento de un determinado *dies a quo*, ni siquiera a la extensión del plazo de prescripción, sino que a la existencia de un plazo máximo. Éste debe necesariamente computarse desde el hecho, pues de lo contrario se iniciará en una fecha que no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una persona se entere de haber sufrido un perjuicio, parafraseando el artículo 1081 inciso 4° del Código Civil. Solo la existencia de un plazo máximo contado desde el hecho que provoca los perjuicios permite a la institución de la prescripción liberatoria cumplir su función de propender a la seguridad jurídica, conforme plantea.

Luego, alega una exposición imprudente al riesgo, fundado en lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, reflexionando sobre dicho instituto y señalando que el demandante se expuso, toda vez que teniendo antecedentes sobre los hechos que ocurrían al interior de Carabineros de Chile, lo que fue materia de la causa penal, no fiscalizó ni evitó de manera alguna la ocurrencia de dichos ilícitos. Además, que existiría una imprudencia o negligencia de organismos estatales que no cumplieron su función y permitieron que se produjera el fraude y el daño o perjuicio para el patrimonio del Estado, entre ellos: a) el Banco del Estado de Chile, al no reportar ni informar a la Unidad de Análisis Financiero de los irregulares e inusuales movimientos bancarios de fondos públicos a cuentas corrientes personales de funcionarios públicos; b) la Unidad de Análisis Financiero, organismo estatal instituido por la Ley N° 19.913, pues no generó las alertas necesarias por los irregulares e inusuales movimientos bancarios de fondos públicos a cuentas corrientes bancarias personales de funcionarios públicos; c) la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), pues dicho órgano tenía el control presupuestario de los fondos fiscales asignados a Carabineros por la Ley Anual de Presupuestos, y por ende el control de la ejecución presupuestaria, sin que en todos los años del fraude hubiese hecho





«RIT»

Foja: 1

alguna observación del mayor gasto presupuestario en función de la planta legal financiada y la dotación efectiva de Carabineros de Chile; d) la Contraloría General de República, pues dicho organismo, en el año 2010, encontró observaciones en el Departamento III Tesorería y Remuneraciones de Carabineros, dispuso un sumario administrativo para determinar responsabilidades y, posteriormente, sin causa justificada, el sr. Contralor Ramiro Mendoza lo dejó sin efecto, instancia administrativa que podría haber evitado el daño o perjuicio del patrimonio del Estado, según denuncia. Además, dice que a la Contraloría General de la República corresponde el registro y control de las Declaraciones de Patrimonio e Intereses de los funcionarios públicos, y que con fecha 26 de enero de 2011 recibió la declaración notarial del Imputado Fernando E. Pérez Barría, Coronel (I) de Carabineros, donde figuraban todos sus bienes raíces, inversiones, sociedades, etc, que son los mismos que en la actualidad están con medida precautoria en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT O-4730-2017, y que no fueron objeto de observaciones por la Contraloría General de la República (año 2011 ascenso grado de Coronel, y 2012 cese de funciones); e) El Ministerio Público, la Fiscalía de Chile, como organismo encargado de investigar denuncias u otras acciones que puedan corresponder a delitos, el 24 de abril del 2011 recibió el Oficio Reservado N° 268/2011 de la Unidad de Análisis Financiero por un reporte de operación sospechosa (ROS) durante los años 2008-2009, entre el proveedor de Carabineros de Chile Leonardo Morales Avendaño y el imputado Arnoldo Rivero Gerdes, quien en esos años era Coronel de Carabineros de Chile y Jefe del Departamento III Tesorería y Remuneraciones, estamento institucional donde estaría el principio de ejecución del fraude de Carabineros, manifestándose que los hechos informados hacen suponer un eventual delito de cohecho entre las partes señaladas. Dicha investigación estuvo a cargo del Fiscal José Morales Opazo, quien –a su juicio- investigó sin acuciosidad y en forma irregular dispuso el archivo de la denuncia, sin consulta al Fiscal Regional, instancia criminal que podría haber evitado el daño o perjuicio al patrimonio del Estado.

Sostiene que lo descrito se trata de un efecto que incide en la cuantía del perjuicio, mas no en su configuración. La culpa aquiliana era el sistema que contemplaba el Derecho Romano, el cual consideraba a la víctima como un verdadero cómplice en el ilícito, motivo por el cual se le prohibía exigir la reparación de los perjuicios experimentados.

Alega la ausencia de nexo causal y añade que cuando se habla de “las transferencias” por la demandante, eso sería falso, ya que se estaría en presencia de una sola transferencia, que se hizo desde una cuenta de Carabineros, valores



«RIT»

Foja: 1

en tránsito, en dirección a una cuenta de propiedad de su representado. Respecto de eso ya van a cumplirse 9 años, esgrime. Según fluye de la misma demanda, el demandado no tuvo relación alguna con la transferencia, más allá de recibir el dinero en su cuenta. Ese hecho en sí mismo no sería constitutivo ni siquiera del delito de hurto por hallazgo. Cuando se descubre este único depósito, el demandado concurre ante el ex General de Finanzas Flavio Echeverría y consulta cómo desde su modesta cuenta puede hacer devolución de estos fondos, pues su tipo de cuenta corriente no le permitía devolver todo de una sola vez, sino que tenía que hacerlo en parcialidades, 8 parcialidades, hasta completar \$35.000.000, y que por presión del entonces Coronel Echeverría Cortéz, su representado estaba en retiro y se desempeñaba como CPR (contratado por resolución), teniendo un ascendiente innegable, el hoy ex General Echeverría Cortéz.

Dispone el artículo 2316 del Código Civil: “Es obligado a la indemnización el que hizo el daño”, y que no existiendo este nexo causal, no se puede exigir indemnización alguna a su representado, a lo que agrega que tampoco obtuvo provecho de dolo ajeno, por tanto, malamente se le puede exigir reparar mal alguno.

Plantea la ausencia de dolo o culpa, ya que no se configura conforme a derecho la obligación de indemnizar, pues no se le puede atribuir culpa a su defendido, menos aún dolo respecto de los supuestos perjuicios que reclama la demandada. El hecho no solo debe ser ilícito, sino también culpable, en el sentido de que ha de poderse dirigir un juicio de reproche personal al autor. Este juicio de reprochabilidad puede fundarse en la comisión dolosa (con dolo) o culposa (con culpa). Al efecto, a fin de distinguir dolo o culpa, rige lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1437, 2284 y 2314 del Código Civil. acusa que la demandante soslaya completamente este requisito de la responsabilidad civil extracontractual. En su larga exposición narra una serie de hechos que habrían ocurrido en distintas dependencias de Carabineros, enfatizando que esos hechos no son atribuibles a su defendido, sino a una generalidad de funcionarios, sin nombre en esta demanda, que habrían incurrido en esos actos. La contraria desliza una participación a su representado, lo que al final se reduciría a una única transferencia realizada desde una cuenta de Carabineros, denominada valores en tránsito. No hay dolo civil, recalca, tampoco hay culpa civil que sea imputable a su representado, quien cumpliendo órdenes de Flavio Echeverría Cortez debió transferir casi la totalidad del dinero originalmente transferido. Por lo demás, tal como la demanda lo indica, a la cuenta que este último le mandó que lo hiciera.



«RIT»

Foja: 1

Señala que los perjuicios que reclama la actora, debería reclamárselos o cobrárselos a quien en definitiva obtuvo verdadero provecho de los distintos actos que desembocaron en lo que comúnmente se ha dado en denominar “IFraude de Carabineros”, no a quienes fueron condenados penalmente por necesidad, ya que la responsabilidad penal difiere de la responsabilidad civil, y es un axioma básico de las Ciencias Jurídicas y Sociales el que un hecho que engendra responsabilidad penal no conlleva implícitamente responsabilidad civil, y viceversa.

Agrega que la sentencia condenatoria penal pronunciada en un juicio abreviado o en uno simplificado en que existió admisión de responsabilidad del imputado, no resulta una vía idónea para el descubrimiento de la verdad en el proceso, y que por ello no es aplicable la norma del artículo 178 Código de Procedimiento Civil que permite hacer valer la sentencia condenatoria penal en el juicio civil de indemnización de perjuicios. Esto, porque se trata de una verdad consensuada, no adversarial, ni tampoco fruto de un juicio jurisdiccional. El procedimiento abreviado no busca establecer la verdad de los hechos o, al menos, no es su propósito principal. Su razón de ser es más bien instrumental: obtención de sentencias (condenas) rápidas, descongestión y ahorro de recursos públicos y privados. Al punto que el legislador ofrece una atenuación de pena —a través de la circunstancia de “colaboración sustancial” contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal— para el imputado que lo acepta. También es funcional a los intereses de las partes: evitación del juicio oral y la incertidumbre de su resultado, ahorro de tiempo y esfuerzo, pago de honorarios o bonos de estímulo asociados al término de causas. Por ello no sería infrecuente que los propios defensores presionen a sus representados para que acepten la oferta de intercambio, aunque los antecedentes de la investigación sean insuficientes para fundar una acusación, y también que fiscales y defensores, con la pasiva aquiescencia del tribunal, se pongan de acuerdo en tramitar paquetes de causas conforme a las reglas de este procedimiento. Al fundarse su adopción fundamentalmente en consideraciones estratégicas de las partes y careciendo de suficiente soporte epistémico, se debería verificar cuidadosamente en sede civil el cumplimiento de los requisitos legales para que proceda la responsabilidad civil extracontractual. Con todo, la responsabilidad civil requiere la existencia de daño, que debe ser probado. Tratándose de sentencias condenatorias penales por delitos de mera actividad, será necesario probar la causalidad (que es propia de los delitos de resultado).

Pide se acojan las excepciones y defensas opuestas y se rechace la demanda, con costas.



«RIT»

Foja: 1

Luego se llama a las partes a conciliación, sin éxito.

Con fecha 9 de septiembre de 2020 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 12 de abril de 2022 se cita a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la parte demandante rindió la siguiente prueba:

Folio 1.

1. Copia de sentencia definitiva dictada con fecha 26 de julio de 2019 por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 16.344-2018. En su texto se establecen los siguientes hechos: *"1) ARTURO MAX ROJAS HENRIQUEZ. Con fecha 16-09-2011 el señor ROJAS HENRIQUEZ recibió un abono en su cuenta corriente N° 11484306 Banco BCI, por un monto total de \$43.524.756 de pesos. Dicho dinero proviene de la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N°9018140 denominada "Valores en Tránsito". Así, el imputado ROJAS HENRIQUEZ, operando como testaferro del imputado acusado en causa RUC 1601014175-7 FLAVIO ECHEVERRÍA CORTÉZ, permitió la utilización de su cuenta bancaria para la sustracción de millonarias sumas desde cuentas institucionales por parte de líderes y miembros de la organización criminal a la que ECHEVERRÍA CORTÉZ pertenecía. Asimismo, luego de recibir ilícitamente los referidos fondos públicos en su cuenta -y siguiendo instrucciones de ECHEVERRÍA CORTÉZ- el imputado ROJAS HENRIQUEZ puso a disposición de miembros de la organización criminal, una parte de tales fondos realizando 8 (ocho) transferencias electrónicas parciales desde su cuenta corriente N° 11484306 Banco BCI entre el 20/09/2011 y el 26/09/2011 a FLAVIO ECHEVERRÍA CORTÉZ, conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecida por ésta".*

Continúa el fallo: *"Así, durante el curso de la investigación, se ha podido establecer que los imputados: ARTURO ROJAS HENRIQUEZ, MAURICIO SALDAÑA VIDAL, JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ BRITO, RICARDO ALBORNOZ JARA Luego de permitir la utilización de cuentas bancarias personales por parte de terceros para recibir en sus cuentas bancarias, múltiples depósitos de millonarias sumas de dinero provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, efectuaron una serie de actos de lavado del dinero ilícitamente obtenido, cumpliendo el rol de hacer entrega de una parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal de causa RUC 1601014175-7 ya sea mediante la realización de transferencias electrónicas de*



«RIT»

Foja: 1

*forma fraccionada o por un solo monto a miembros de la organización criminal; mediante retiros íntegros o fraccionados de millonarias sumas de dinero a través de cajeros automáticos o por caja, en la misma sucursal bancaria o en distintas, entre otros métodos, además de la realización de entregas de dinero en efectivo a través de bolsas, sobres o mochilas, en edificios institucionales, domicilios particulares, parques u otros lugares.*

*Todo lo anterior, durante distintos días para no despertar sospechas de su actuar ilícito ni generar alertas en los sistemas de control, eliminando el rastro de su origen ilícito. De esta forma, los imputados ya individualizados, con dineros provenientes de malversación de caudales públicos, a sabiendas que dicho dinero tenía un origen ilícito, y con el objeto de poder aprovecharlo y utilizarlo sin temor a controles o a perderlos por la ilícita forma en que fue adquirido, realizaron una serie de actos de lavado de activos, destinados a ocultar su origen ilícito, dándoles en definitiva una apariencia de legalidad. Para tal efecto, las ganancias ilícitamente obtenidas fueron objeto de una serie de actos de adquisición, posesión, tenencia, fraccionamiento y uso de bienes, conociendo su origen espurio y con ánimo de lucro”.*

También se consignó que habiendo aceptado tanto los hechos materia de la acusación, como los elementos probatorios que obran en la carpeta investigativa, el Tribunal estuvo en condiciones de dar por establecido que efectivamente se han verificado los hechos que fueron materia de la acusación, no solo por la aceptación efectuada por los implicados, sino que, además, por la falta de controversia de la defensa.

En la parte resolutive se condenó al demandado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de Inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, más una multa de diez unidades tributarias mensuales, como autor del delito de malversación de caudales públicos, en grado consumado. Asimismo, se lo condenó a la pena de setecientos días de presidio menor en su grado medio y accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, además de una multa de diez unidades tributarias mensuales, como coautor del delito de lavado de activos, en grado consumado, ambos cometidos en la ciudad de Santiago.

2. Copia de certificado de ejecutoria de fecha 2 de agosto de 2019, respecto de la sentencia de fecha 26 de julio de 2019, RUC N° 1800876868-K, RIT N°



«RIT»

Foja: 1

16344-2018, la que se encuentra firme y ejecutoriada respecto de diversos condenados, entre ellos, el demandado de autos Arturo Max Rojas Henríquez.

Folio 82.

3. Copia de sentencia definitiva de fecha 5 de mayo de 2020, dictada en causa Rol C-23851-2019 del 19° Juzgado Civil de Santiago.

4. Copia de sentencia definitiva de fecha 30 de julio de 2020, dictada en causa Rol C-23887-2019 del 21° Juzgado Civil de Santiago.

Mediante audiencia de percepción documental de fecha 30 de marzo de 2022.

4. Copia de dos registros de audio, de 01:18:58 y 19:53 minutos, en los que se reproduce la audiencia seguida en causa RIT 16.344-2018. Los imputados -dentro de quienes se encuentra el demandado- aceptan someterse a un procedimiento abreviado, los hechos de la acusación y los antecedentes en que se funda.

**SEGUNDO:** Que la parte demandada rindió la siguiente prueba instrumental.

Folio 47.

1. Copia de oficio secreto FN N° 275/2011 enviado por la Fiscalía Nacional del Ministerio Público a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, de fecha 16 de mayo de 2011, en el cual se transmite oficio reservado N° 268/11 de fecha 26 de abril de 2011 enviado por el Director (S) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al sr. Fiscal Nacional de Ministerio Público, en virtud del cual informa, según lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 19.913. El tenor de la misiva es señalar que en dicha comunicación se informa sobre la existencia de indicios que podrían ser constitutivos del delito de lavado de activos tipificado en el artículo 27, y del delito de asociación ilícita para lavar dinero, previsto y sancionado en el artículo 28, ambos de la Ley N° 19.913, que provendrían de un reporte de operación sospechosa o en efectivo enviado a la UAF.

Folio 49.

2. Copia de sentencia definitiva dictada con fecha 26 de julio de 2019, por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 16.344-2018. El instrumento es el mismo ya reseñado en la prueba de la parte demandante.

Folio 52.



«RIT»

Foja: 1

3. Copia de instrumento denominado: "Informe Pericial Social" de fecha 3 de mayo de 2019, realizado por Marisol Alejandra Rodríguez Contreras, respecto de Arturo Max Rojas Henríquez.

4. Copia de cartolas de cuenta corriente N° 38 y 39 en Banco BCI, respecto del cliente Arturo Max Rojas Henríquez, por el período comprendido entre el 12 y el 26 de septiembre de 2011.

5. Copia de resolución N° 885 de fecha 17 de junio de 2011, emitida por Carabineros de Chile, Departamento de Pensiones, por la que se otorgan beneficios a Arturo Max Rojas Henríquez, por su retiro, producido con fecha 2 de abril de 2011.

Folio 54.

6. Copia de artículo de prensa emitido por CIPER Chile con fecha 13 de junio de 2018, titulado: "General Echeverría sepultó en 2011 pista clave que llevaba al mega-fraude en Carabineros".

Folio 57.

7. Copia de orden de entrega N° 1 de fecha 13 de agosto de 2014, emitida por Carabineros de Chile, Dirección de Finanzas, en la que se ordena que el Teniente Coronel Héctor Emilio Nail Bravo hará entrega de la repartición Departamento III Tesorería y Remuneraciones a Arturo Max Rojas Henríquez, Coronel, que se llevaría a efecto el 18 de agosto de 2014.

8. Copia de orden de entrega N° 1 de fecha 18 de diciembre de 2014, emitida por Carabineros de Chile, Dirección de Finanzas, en la que se ordena que el Coronel Arturo Max Rojas Henríquez hará entrega de la repartición Departamento III Tesorería y Remuneraciones al Teniente Coronel Héctor Emilio Nail Bravo, que se llevaría a efecto el 23 de diciembre de 2014.

9. Copia de acta de notificación de fecha 11 de agosto de 2014, en la que se notifica a Arturo Max Rojas Henríquez el Decreto N° 863, de fecha 26 de marzo de 2014, por la cual se lo llamó a servicio por un período de hasta cinco años, siendo un Coronel de Carabineros en situación de retiro absoluto.

Folio 59.

10. Copia del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros N° 8.

Folio 61.



«RIT»

Foja: 1

11. Copia de Reglamento de Intendencia de Carabineros de Chile, Decreto N° 221, de fecha 9 de julio de 1981.

Folio 96.

12. Copia de demanda de indemnización de perjuicios, deducida por el Fisco de Chile en contra de 31 demandados.

**TERCERO:** Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas, consistente en instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emanados exclusivamente de la parte que los presenta o de terceros que no concurrieron a ratificarlos, como el denominado "Informe Pericial Social" de fecha 3 de mayo de 2019, realizado por Marisol Alejandra Rodríguez Contreras, al que no conferirá -por aquella razón- otro valor que el de simple indicio o base de una eventual presunción.

Por tanto, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado, gozando de una verdadera presunción de autenticidad, tanto respecto del hecho de haber sido dados por las personas que comparecen en ellos, como –en su caso- de haber sido autorizados por la persona que actúa como ministro de fe pública. Además, los instrumentos públicos hacen plena fe en cuanto a su fecha.

Mención especial merece la sentencia definitiva de carácter condenatorio del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 16.344-2018, conforme a lo establecido en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que regulan la eficacia heterogénea y refleja de la cosa juzgada penal en materia civil, en atención a la coherencia sistémica que debe primar en el ordenamiento jurídico, instrumento público hace plena prueba en cuanto a los hechos en ella asentados, que sirvieron de fundamento a las condenas impuestas.

Finalmente, las copias de sentencias acompañadas por el Fisco (de fecha 5 de mayo y 30 de julio de 2020), no serán consideradas en forma especial, ya que en lo medular no constituyen medios probatorios, por versar sobre la aplicación del derecho, y no sobre los hechos materia de esta contienda, y por no tener un carácter vinculante, atendido lo prescrito por el artículo 3 del Código de Bello.





«RIT»

Foja: 1

**CUARTO:** Que, con la prueba rendida, previamente valorada, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

1. Que con fecha 16 de septiembre de 2011, Arturo Max Rojas Henríquez recibió un abono en su cuenta corriente N° 11484306 del Banco BCI, por un monto total de \$43.524.756, dinero que provenía de la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N° 9018140 denominada “Valores en Tránsito”.

2. Que Arturo Max Rojas Henríquez operó como testaferro de Flavio Echeverría Cortéz, imputado acusado en causa RUC 1601014175-7, permitiendo la utilización de su cuenta bancaria –de Rojas Henríquez- para la sustracción de millonarias sumas desde cuentas institucionales por parte de líderes y miembros de la organización criminal a la que Echeverría Cortéz pertenecía, conforme se lee en el fallo penal.

3. Que en la causa RIT 16.344-2018 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el demandado aceptó los hechos previamente señalados, materia de la acusación, lo mismo que los elementos probatorios de la carpeta investigativa, por lo que dicho Juzgado estuvo en condiciones de dar por establecido que efectivamente se han verificado los hechos que fueron materia de la acusación, no solo por la aceptación efectuada por los implicados, sino que, además, por la falta de controversia de la defensa.

4. Que en la causa referida, mediante sentencia definitiva de fecha 26 de julio de 2019, se condenó al demandado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de Inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, más una multa de diez unidades tributarias mensuales, como autor del delito de malversación de caudales públicos, en grado consumado. Asimismo, se le condenó a la pena de setecientos días de presidio menor en su grado medio, accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, y una multa de diez unidades tributarias mensuales, como coautor del delito de lavado de activos, en grado consumado, ambos injustos cometidos en Santiago.

5. Que la sentencia señalada adquirió el carácter de firme y ejecutoriada, mediante certificación de fecha 2 de agosto de 2019.

**QUINTO:** Que la responsabilidad civil extracontractual, que es la que ha hecho valer la demandante, apoyada principalmente en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, también conocida como delictual, cuasidelictual o aquiliana, es



«RIT»

Foja: 1

aquella que se refiere a la obligación de reparar los perjuicios que resultan cuando una persona comete un hecho ilícito que ocasiona daño a otra.

Así, se ha dicho que los requisitos de la responsabilidad civil por culpa o negligencia pueden ser ordenados en cuatro grupos: i) una acción libre de un sujeto capaz; ii) realizada con dolo o negligencia; iii) que el demandante haya sufrido un daño; y, iv) que entre la acción culpable y el daño exista una relación causal (Barros Bourie, E. (2013). Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile).

**SEXTO:** Que, en cuanto a los supuestos que devienen en ser los más elementales del régimen invocado, especialmente la comisión de un hecho ilícito, debe apuntarse que su realización se encuentra plenamente acreditada, siendo un hecho de la causa que el demandado, Arturo Max Rojas Henríquez, perpetró los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en contra del Fisco de Chile, al recibir -con fecha 16 de septiembre de 2011- un abono en su cuenta corriente N° 11484306 del Banco BCI, ascendente a la suma de \$43.524.756, dinero que provenía de la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N° 9018140, denominada: "Valores en Tránsito".

El demandado permitió la utilización de su cuenta bancaria para la sustracción de millonarias sumas desde cuentas institucionales por parte de líderes y miembros de la organización criminal a la que pertenecía, operando como testaferro de Flavio Echeverría Cortéz.

Pues bien y como se anticipaba ut supra, los hechos asentados en la sentencia condenatoria no pueden ser modificados, por tratarse de una sentencia ejecutoriada que tiene relación directa con lo debatido en este juicio civil, produciendo cosa juzgada.

La situación planteada corresponde a la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada. Con ella, como ha dicho la doctrina *"lo que se consigue es vincular a los tribunales, impidiendo que en un nuevo proceso se decida una determinada acción de modo contrario a como fue fallada con anterioridad otra acción, en cuanto la primera decisión sea prejudicial de otra posterior. El principio jurídico comprometido aquí es el siguiente: no permitir dos resoluciones distintas sobre un objeto procesal conexo"* (Romero, Alejandro, La cosa juzgada en el proceso civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, 2002, Santiago, Chile, p. 93).

En este caso, la función positiva de la cosa juzgada se manifiesta en la categoría denominada influencias de la cosa juzgada, referida al análisis de los



«RIT»

Foja: 1

efectos que una sentencia con este valor -cosa juzgada- puede producir en otro orden jurisdiccional.

El artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece: *“En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado”*. El artículo 180 del mismo Código prevé: *“Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”*.

Las normas copiadas resultan plenamente aplicables al caso de autos. En efecto: a) estamos en presencia de una sentencia penal condenatoria, con lo que ha quedado determinada la existencia de los delitos reseñados; b) se ha hecho valer, ya que el demandante se basó e hizo referencia a la sentencia condenatoria penal; c) hay una relación lógica y necesaria entre la condena penal referida a los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, con la defraudación de \$43.524.756 del Fisco de Chile, puesto que la primera –la sentencia penal- es antecedente de la segunda –la sentencia civil-, ya que la causa u origen de los daños está, precisamente, en la participación del ex uniformado al dar su anuencia para el depósito de los referidos dineros en su cuenta corriente.

De esta manera, se tiene por plenamente probada la responsabilidad civil de Arturo Max Rojas Henríquez, en carácter de dolosa, que se tradujo en un perjuicio fiscal determinado, que debe ser reparado. Por ende, se entienden configurados todos los requisitos del régimen legal invocado, por lo que se acogerá la demanda, como se dirá en lo resolutivo, por el total de la cantidad defraudada establecida, más reajustes desde que la sentencia penal quedó firme, para más certeza, e intereses corrientes desde la constitución en mora, con la notificación de la demanda de autos, que se entiende suficiente requerimiento.

**SEPTIMO:** Que la responsabilidad civil no se ve desvirtuada por la alegación de la parte demandada consistente en que el Fisco se habría expuesto imprudentemente al daño, por no tomar oportunamente las medidas necesarias, en relación al hecho ilícito cometido.

Al efecto, conviene recordar que el artículo 2330 del Código Civil exige para que sea procedente la reducción del daño que la víctima haya contribuido a su producción en virtud de una acción u omisión negligente, configurando un fenómeno de concausas. En otros términos, se requiere que el daño sea el



«RIT»

Foja: 1

resultado simultáneo de ambos sujetos, aunque con intensidades diversas. Y es en virtud de esta intervención convergente de ambos involucrados en el hecho ilícito que resulta procedente la rebaja de la cuantía del resarcimiento (Excma. Corte Suprema, Rol 466-2014).

La hipótesis previamente planteada no se produce, porque no se acreditó mediante prueba objetiva que el Fisco, con su actuar, haya contribuido de manera negligente a la concreción del resultado dañoso, cuya reparación constituye el objeto de autos. Por el contrario, es un hecho irrefutable que tal detrimento tuvo por fuente y origen la comisión de un hecho doloso fraguado y ejecutado por el demandado y otras personas, piezas de una organización criminal desbaratada, cuyo fin era precisamente defraudar a Carabineros de Chile, hechos que fueron investigados y sancionados legalmente, por todo lo cual la teoría esbozada por la demandada no tiene cabida, por lo que será rechazada.

**OCTAVO:** Que tampoco tiene la virtud de alterar lo que se viene razonando el hecho de que el demandado alegue haber transferido, en al menos ocho ocasiones, los dineros que ilegítimamente recibió en su cuenta bancaria, toda vez que tales movimientos no cambian la situación fundamental dada por la defraudación de fondos fiscales, siendo un hecho no discutible que el sr. Rojas Henríquez obtuvo la suma de \$43.524.756, que corresponde al daño causado al erario nacional.

En efecto, lo que haya podido hacer el demandado con los dineros mal habidos no puede erigirse en una suerte de reducción del daño provocado por él, ascendente a \$43.524.756, puesto que tales fondos, sin su decisión, no habrían circulado hasta otros patrimonios, que es lo que alega. Todo esto, de acuerdo a los hechos de la causa.

**NOVENO:** Que, finalmente, se desechará la excepción de prescripción, fundada en que los hechos de la demanda habrían tenido lugar el día 16 de septiembre de 2011, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

En efecto, no hay controversia en cuanto a que la acción intentada es susceptible de ser tenida por prescrita. Tampoco se discute que desde la ocurrencia de estos hechos hasta la intimación legal de la demanda pasaron más de cuatro años.

Sin embargo, del análisis de la sentencia penal ejecutoriada dictada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT 16.344-2018, de fecha 26 de



«RIT»

Foja: 1

julio de 2019, fluye con claridad que el demandado, con el propósito de acceder a un juicio abreviado, reconoció y aceptó libre y voluntariamente los hechos que fueron materia de la acusación, optando por no controvertirlos, comportamiento que tiene consecuencias jurídicas, como la renuncia tácita de la prescripción, atendida la coherencia que es posible exigir en función de los actos propios, en relación a la buena fe.

Al respecto, el artículo 2494 Código Civil señala que hay renuncia tácita de la prescripción: *“cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo”*.

La renuncia tácita referida se verifica cuando el que puede alegarla realiza un hecho o acto que implica reconocer el derecho del dueño o del acreedor. En efecto, la renuncia es una manifestación de voluntad del renunciante, de carácter unilateral e irrevocable. Unilateral, por cuanto para perfeccionarse requiere de la voluntad de una sola persona y no necesita ser aceptada por quien se ve beneficiado por ella. Es también irrevocable, en el sentido de que no se puede dejar sin efecto por la sola voluntad del renunciante. Además, la renuncia solo puede afectar al interés personal del renunciante y su efecto queda producido por el hecho de reconocerse por el demandado la existencia de su obligación.

Por otra parte, si bien la renuncia tácita no está subordinada en su forma a ninguna condición precisa y puede resultar de todo acto o hecho del deudor, éstos deben implícitamente poner de manifiesto que de parte de éste existe la intención de renunciar a la prescripción en curso. Es decir, deben ser actos o hechos concluyentes, inequívocos y específicos, en este sentido (Excma. Corte Suprema Rol N° 30.983-2016).

Tales motivos constituyen argumentos suficientes para el rechazo de la excepción alegada, siendo necesario insistir en que la aceptación de los hechos no solo lleva aparejado ciertas ventajas, sino también algunos costos, directos o no, con repercusión civil, como ocurre en este caso, en que se hace valer una sentencia penal dictada en un juicio legalmente tramitado.

**DECIMO:** Que la prueba no analizada en particular, en nada altera lo que se ha venido razonando y decidiendo, siendo innecesaria.



«RIT»

Foja: 1

**UNDECIMO:** Que se impondrá las costas a la parte demandada, por haber sido totalmente vencida, y por no haber motivo que justifique relevarla de tal carga procesal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 2314 y 2329 del Código Civil; y, 144, 170, 342 y 680 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que se acoge la demanda, por lo que se condena a Arturo Max Rojas Henríquez a pagar al Fisco de Chile la suma de \$43.524.756, más reajustes, intereses y costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-25.963-2019

**DICTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecinueve de Abril de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horoficial.cl>